

Iquique, veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece don **DAVID ANTONIO TORO IGLESIAS**, abogado, domiciliado en Bolívar N° 354, oficina 301, Iquique, en representación de **HDI SEGUROS S.A.**, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don **Felipe Feres Serrano**, ingeniero civil y por don **Jorge Moreno Paiva**, ingeniero civil, ambos domiciliados en Avenida Manquehue Norte N° 160, Edificio Plaza Manquehue, comuna de Las Condes; quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en procedimiento sumario en contra de don **ANÍBAL JAYRA FLORES MAMANI**, ignora profesión u oficio, domiciliado en calle El Alto N° 2241, departamento 102, Block 14, de la comuna de Alto Hospicio; en su calidad de conductor y dueño del automóvil marca Toyota, modelo Vitz 1.5, color gris, año 2005, P.P.U. HPXX.66-8, que causó daños en colisión.

Fundamenta su demanda señalando que el día 31 de enero del año 2020, alrededor de las 18:00 horas aproximadamente, en circunstancias que don Igor Antonio Quiñones Antivilo, conducía el station wagon marca Renault, modelo Captur Expression 1.2 AUT, color naranja Arizona blanco, año 2015, P.P.U. JBHK.67-5, de propiedad, a la fecha del accidente, de doña Dora Cecilia Antivilo Miranda, por calle 21 de Mayo en dirección al sur y al llegar a la intersección con calle Sargento Aldea, fue colisionado en la parte lateral derecha por el automóvil marca Toyota, modelo Vitz 1.5, color gris, año 2005, P.P.U. HPXX.66-8, conducido por el demandado, quien lo hacía por calle Sargento Aldea en dirección al oriente, no respetando la señal ceda el paso



que enfrentaba ubicada en aquella intersección, causando daños en colisión.

Señala que, por los hechos antes descritos, se presentó querrella infraccional quedando ésta radicada en el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique dando inicio a la causa Rol 3180-D-2020-035, dictándose sentencia infraccional el día 31 de agosto de 2021, resultando condenado don Aníbal Jayra Flores Mamani al pago de una multa de 1,5 U.T.M., a beneficio municipal, donde se determinó que era el autor de la infracción de no respetar el derecho preferente de paso de otro conductor al enfrentar una señal ceda el paso y continuar su marcha, colisionándolo y causando daños en choque, conducta tipificada como grave en el artículo 200 N° 11 de la Ley 18.290 y siendo ésta la causa basal y directa del accidente determinada por el tribunal.

Deduce de lo anterior que el demandado es civilmente responsable de la colisión y de los perjuicios que siguieron de ella, en su calidad de conductor y dueño del vehículo que causó la colisión.

Explica que, por lo anterior, fue necesario que HDI Seguros S.A. efectuara un exhaustivo peritaje al vehículo asegurado, a cargo del liquidador Igor Osorio Alarcón, quien, en atención a los daños sufridos por el vehículo y su costo de reparación, declaró el siniestro como pérdida total, estableciendo el valor real del vehículo al momento del siniestro en la suma de \$7.030.462, tal como constaría en el finiquito.

Invoca como fundamento de Derecho, los artículos 1437 y 2314, ambos del Código Civil; y los artículos 108, 140 inciso 2°, 165, 167 N° 2, 10 y 13, y 169 inciso 1 de la Ley N° 18.290 de Tránsito.

En cuanto a la indemnización, demanda la suma de \$7.030.462, por concepto de daño emergente, o en subsidio, la suma que el Tribunal se sirva fijar, más los reajustes según la variación del IPC y los intereses corrientes.

Por lo anterior, solicita al Tribunal, tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en procedimiento sumario, en contra del demandado ya individualizado, en su calidad de conductor y dueño,



respectivamente, del móvil que provocó daños y en definitiva se acoja la demanda, y que se condene al demandado a indemnizar perjuicios por la suma de \$7.030.462, o lo que el tribunal estime, ajustado a derecho y al mérito de autos, y que dichas cantidades sean pagadas reajustadas desde la fecha del accidente y hasta el pago efectivo, con intereses corrientes calculados sobre la cantidad reajustada, con costas.

A folio 46, se celebró el comparendo de contestación y conciliación, con la asistencia de la parte demandante, representada por su apoderado, don **CHRISTIAN JAVIER VILLARROEL CHACÓN**, abogado; y con la asistencia de la parte demandada, representado por su apoderado, don **DIMAS NUÑEZ MAYA**, abogado.

La parte demandada contesta mediante escrito de folio 42, solicitando el rechazo del libelo, con costas, en virtud de los siguientes argumentos:

a) Opone la excepción de prescripción, citando el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda.

Expresa que la parte demandante interpone una demanda el 23 de junio de 2022, fundada en una supuesta colisión ocurrida el 31 de enero de 2020, según lo señalado por la actora. Agrega que la demanda fue notificada el 8 de julio de 2024, es decir, una vez que el plazo de prescripción se encontraba cumplido, porque el plazo de 4 años se cumplió el 31 de enero de 2024.

Señala que, el hecho generador de los daños alegados por la demandante se encuentra prescrito, por lo que debe rechazarse la demanda.

b) Niega la versión de los hechos y consecuencias jurídicas deducidas por el demandante, e igualmente rechaza la procedencia y monto de las indemnizaciones impetradas; por lo que corresponde al demandante probar la existencia de la obligación indemnizatoria de la que alega ser acreedor, ya que debe acreditar todos y cada uno de los requisitos de la acción impetrada.

c) Alega la inexistencia de la relación de causalidad entre los daños



sufridos por el vehículo y el cobro total del mismo. Expresa que, atendido a que su representado no fue demandado de perjuicios previamente, éstos no están determinados, por lo que debe acreditarse su cuantía y extensión.

Cuestiona que, si los daños fueron debido a una colisión en la parte lateral derecha, cómo es posible que estos mismos daños hayan ocasionado la pérdida total del vehículo, por lo cual no existiría la relación de causalidad exigida para configurar la acción.

d) Y, en subsidio, alega la improcedencia de intereses y reajustes, ya que en ninguna circunstancia procede el pago de reajustes e intereses con anterioridad a que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado y, además, se requiera legalmente su cumplimiento.

Por tanto, solicita, en definitiva, tener por opuesta la excepción de prescripción y las defensas alegadas, que se resuelva acogiendo la excepción y/o alegaciones interpuestas, rechazando la demanda en todas sus partes, con costas.

Consta que se llamó a las partes a conciliación y ésta no se produjo.

A folio 48, se recibió la causa a prueba.

A folio 51, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA OBJECION DOCUMENTAL:

PRIMERO: Que, al otrosí del escrito de folio 42, que se tuvo como parte integrante del comparendo de folio 46, comparece la parte demandada promoviendo incidente de objeción documental respecto de la copia de mandato especial y acta de dejación de restos, y la copia de denuncia de siniestro N° 93008497, acompañados por el actor en la demanda.

Objeta la “copia autorizada de mandato especial y acta de dejación de restos” alegando su falta de integridad, fundado en que dicho documento, además de ser una fotocopia simple, se encuentra incompleto, ya que se visualiza el timbre del notario cortado a la mitad.



Alega la falta de autenticidad del “denuncio de siniestro N° 93008497”, emitido por HDI Seguros, toda vez que no se encuentra firmado, desconociéndose por tanto su autor.

SEGUNDO: Que, en la audiencia de folio 46, comparece la parte demandante evacuando verbalmente el traslado, solicitando el rechazo de la objeción.

Contesta el traslado señalando que, si bien en la “copia autorizada de mandato especial y acta de dejación de restos” no se visualiza de forma íntegra las firmas y timbres por motivos de su digitalización; pero, no existe duda respecto a su extensión ni otorgamiento del documento por parte del ministro de fe.

Indica, respecto a la copia de denuncia objetada, que éste cumple con todos los estándares de la misma compañía al momento de emitir dichos documentos, por lo cual no deja duda de su integridad ni de su autenticidad.

TERCERO: Que, tal como se desprende del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos privados sólo pueden ser impugnados por falsedad o falta de integridad, es decir, por no haber sido otorgado en la forma y por quien se señala como otorgante, o por no ser físicamente completo el documento.

Oportuno parece señalar que, del artículo 1699 inciso 1° del Código Civil, se colige que solo los instrumentos públicos pueden ser impugnados por falta de autenticidad, cuando éstos no cumplen algunos de los requisitos señalados en dicha norma; y, en ese orden de ideas, según lo dispone el Legislador en el precitado artículo, los instrumentos privados no son “auténticos” ya que, por su naturaleza, se caracterizan por no estar protegidos por la fe pública que proviene de la participación de un funcionario público en su formación, con el cumplimiento de formalidades.

Que, habiendo quedado asentado que la falta de autenticidad no es una causal de impugnación aplicables a los instrumentos privados, preciso resulta



rechazar la objeción documental promovida respecto del “denuncio de siniestro N° 93008497”.

CUARTO: Que, como se adelantó, la falta de integridad de un instrumento privado supone que sólo se haya acompañado parte del instrumento, vale decir, no se incorporó al proceso el documento completo.

Que, revisado el documento impugnado, se observa que, en la parte final de la copia del mandato especial y acta de dejación de restos, el sello y firma del notario se encuentra digitalizado de forma incompleta; sin embargo, no se vislumbra que al documento le falte una parte integral del contenido del texto, ya que no solo se puede visualizar gran parte del sello notarial, sino que además se puede leer correctamente su contenido; de lo que se colige que el documento no se encuentra incompleto, por lo que preciso resulta rechazar la objeción documental promovida respecto de la “copia autorizada de mandato especial y acta de dejación de restos”.

II.- EN CUANTO AL FONDO.

QUINTO: Que, a folio 1, comparece don **DAVID ANTONIO TORO IGLESIAS**, abogado, en representación de **HDI SEGUROS S.A.**, legalmente representada por don **Felipe Feres Serrano** y por don **Jorge Moreno Paiva**; quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio sumario en contra de don **ANÍBAL JAYRA FLORES MAMANI**, en su calidad de conductor y dueño del automóvil marca Toyota, modelo Vitz 1.5, color gris, año 2005, P.P.U. HPXX.66-8, que causó daños en colisión; y, por los motivos relatados en la parte expositiva, solicita al tribunal que en definitiva se acoja la demanda, y que se condene al demandado a indemnizar perjuicios de acuerdo al detalle indicado de la demanda por la cantidad de \$7.030.462, o lo que el tribunal estime, ajustado a derecho y al mérito de autos, y que dichas cantidades sean pagadas reajustadas desde la fecha del accidente y hasta el pago efectivo, con intereses corrientes calculados sobre la cantidad reajustada, con costas.

SEXTO: Que, en la audiencia de folio 46, la parte demandada contestó



la demanda mediante presentación de folio 42, oponiendo la excepción de prescripción y demás alegaciones, solicitando el rechazo de la demanda por los motivos señalados en la parte expositiva del fallo.

SÉPTIMO: Que, la responsabilidad extracontractual demandada está contenida en el artículo 2314 del Código Civil, que dispone: *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”* Señalando asimismo la doctrina, que quien haya cometido una acción dolosa o culposa que haya producido daño a un tercero, y existiendo un vínculo de causalidad entre el acto y los resultados dañosos, deberá indemnizar los perjuicios ocasionados.

OCTAVO: Que, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

Prueba documental:

Que, a folio 3, el demandante acompañó los siguientes documentos:

1) copia de sentencia infraccional, dictada el 31 de agosto del 2021 por el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique en los autos Rol N° 3180-2020-035; 2) copia de póliza N° 52762 emitida por HDI Seguros S.A.; 3) copia de denuncia de siniestro N° 93008497, emitido por HDI Seguros S.A., de fecha 01 de febrero de 2020; 4) copia de finiquito por pérdida total, de fecha 4 de marzo del 2020, autorizado por el Notario Público; 5) copia de mandato especial y acta de dejación de restos, de fecha 3 de marzo del 2020 autorizado por el Notario Público; 6) certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo inscripción JBHK.67-5; 7) certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo inscripción HPXX.66-8; 8) copia de mandato judicial, de fecha 18 de marzo de 2021.

NOVENO: Que, la parte demandada no rindió prueba alguna.

DÉCIMO: Que, como medida para mejor resolver, a folio 55 se tuvo a la vista los autos Rol 3180-D-2020-035 seguidos ante el Segundo Juzgado de Policía Local, guardándose el expediente en custodia bajo el registro N° 2547-



2024 de este tribunal.

DÉCIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio de no ser un hecho controvertido, se hace presente que la legitimación activa del actor para demandar se justifica por haber operado una subrogación legal respecto de los derechos y acciones que le correspondían al asegurado, en su calidad de dueño del vehículo siniestrado y asegurada por la compañía accionante, según lo estatuido en el artículo 534 del Código de Comercio.

1. En cuanto a los elementos de la responsabilidad extracontractual.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la responsabilidad extracontractual demandada está contenida en el artículo 2314 del Código Civil, que dispone: *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.*

En este sentido, en base a lo previsto en los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código Civil, la doctrina ha señalado que los elementos para la concurrencia de la responsabilidad extracontractual son: 1) La existencia de un hecho u omisión que provenga de dolo o culpa del autor; 2) Que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil; 3) Que el hecho u omisión cause un daño a la víctima; y, 4) Que entre el hecho u omisión doloso o culpable y el daño causado exista una relación de causalidad.

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto del primero de los elementos de la responsabilidad extracontractual, esto es, la existencia de un hecho u omisión que provenga del dolo o la culpa del autor; del mérito de la copia de la sentencia definitiva acompañada a folio 3, aunado a la causa tenida a la vista como medida para mejor resolver a folio 55, en la que se lee que por sentencia dictada el 31 de agosto de 2021 en la causa Rol N° 3180-D-2020-035 por el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique, se condenó a don Aníbal Jayra Flores Mamani al pago de una multa a beneficio municipal por un monto de 1,5



unidades tributarias mensuales, por ser autor del ilícito infraccional consistente en *“No respetar el derecho preferente de paso de otro conductor al enfrentar una señal Ceda el Paso y continuar su marcha, colisionándolo y causando daños en choque, conducta tipificada como grave en el artículo 200 N° 11 de la Ley 18.290 y siendo ésta la causa basal y directa del accidente determinada por el Tribunal”*; instrumentos que, ponderados de conformidad a lo previsto en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 1700 del Código Civil, hacen plena prueba de los hechos denunciados por el actor.

Así las cosas, se tiene por acreditada la concurrencia del primer elemento de la responsabilidad extracontractual.

DÉCIMO CUARTO: Que, habiéndose establecido la existencia de un hecho u omisión que proviene de dolo o culpa del autor, en la forma señalada en el fundamento precedente, y siendo el autor capaz de delito y cuasidelito civil, lo que constituye la regla general en materia de responsabilidad extracontractual, no probándose la situación contraria en la causa, entonces se debe determinar la concurrencia del tercer elemento de la responsabilidad extracontractual, esto es, que el hecho u omisión ocasione daño a la otra parte.

Que, en la especie, el daño consiste en los perjuicios sufridos por el vehículo asegurado por la demandante, la que se subrogó legalmente en los derechos de la víctima de la colisión, por estar asegurada y haber pagado la indemnización del automóvil.

Que, el choque se encuentra suficientemente acreditado de la copia de sentencia infraccional dictada el 31 de agosto de 2021 en la causa Rol N° 3180-D-2020-035 por el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique, cuya copia consta a folio 3 y en la causa tenida a la vista a folio 55; aunado a la copia de denuncia de siniestro N° 93008497, y copia de finiquito por pérdida total autorizada ante notario, todas aportadas a folio 3.

DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a la concurrencia del cuarto elemento de la responsabilidad extracontractual, esto es, que entre el hecho u



omisión doloso o culpable y el daño causado exista una relación de causalidad.

Que, de la copia de sentencia definitiva dictada el 31 de agosto de 2021 en la causa Rol N° 3180-D-2020-035 por el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique, en la que se lee que la sentenciadora estableció que la infracción al artículo 200 N° 11 de la Ley de Tránsito que cometió el demandado es la causa basal y directa del accidente determinado por el tribunal, lo que permite tener por suficientemente acreditado que la causa de los daños inferidos al actor fue la conducta negligente del demandado siendo este el conductor y dueño del vehículo, y, por ende, se tiene por establecido el nexo causal requerido para la procedencia de la responsabilidad extracontractual reclamada.

DÉCIMO SEXTO: Que, como se viene diciendo, ha quedado acreditado en los motivos que anteceden la concurrencia en el caso de los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad civil extracontractual, correspondiendo entonces adentrarnos en el estudio de la excepción de prescripción opuesta.

3.- Respecto a la excepción de prescripción extintiva.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la parte demandada alega que, conforme a los antecedentes aportados por el actor, se podría establecer como fecha probable de la ocurrencia del hecho ilícito el 31 de enero de 2020; por ende, a la época de la notificación de la demanda (que se realizó el 8 de julio de 2024), había transcurrido el plazo de prescripción extintiva de la acción.

En este sentido, oportuno parece señalar que el artículo 2492 del Código Civil ha definido conjuntamente la prescripción adquisitiva y la extintiva, por lo que, eliminando las referencias relativas a la usucapión, se extrae que la prescripción extintiva o liberatoria es un modo de extinguir los derechos y acciones ajenas, por no haberlos ejercitado el acreedor o titular de ellos durante cierto lapso.

Así las cosas, para que el deudor quede liberado en virtud de la prescripción extintiva, es menester la concurrencia copulativa de tres requisitos,



a saber: a) la existencia de una obligación cuya acción sea prescriptible; b) el transcurso del tiempo fijado por la ley, c) la inactividad del acreedor.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto a la existencia de una obligación cuya acción sea prescriptible, quedó asentado precedentemente que concurren en la especie los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad civil extracontractual demandada; y en tal sentido, se tendrá por acreditada la existencia de una acción o derechos prescriptible.

DÉCIMO NOVENO: Que, respecto del transcurso del tiempo, el artículo 2514 inciso 1º del Código Civil dispone que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige cierto lapso durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, el que se computa desde que la obligación se haya hecho exigible según precisa el inciso 2º de dicha norma. Ahora bien, tratándose de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, el artículo 2332 del Código Civil dispone que dichas acciones *“prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”*.

Que, del mérito de la copia de sentencia definitiva acompañada a folio 3, aunado a la causa tenida a la vista como medida para mejor resolver a folio 55, ambos ponderados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 1700 del Código Civil, hace plena prueba que la perpetración del acto acaeció el 31 de enero de 2020, época en que el vehículo conducido por el demandado colisionó al vehículo asegurado por la demandante.

Consta en este expediente que, la demanda de autos fue notificada a la parte demandada el 8 de julio de 2024, tal como consta del atestado de folio 33, lo que podría llevar a concluir *—a priori—* que la demanda fue notificada una vez transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 precitado.

Sin embargo, es menester tener presente que el Legislador establece una suspensión del plazo de prescripción, en el evento que se ventile un



procedimiento infraccional ante el Juzgado de Policía Local. En efecto, el artículo 9 inciso 5° de la Ley N° 18.287 que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, dispone que *“Si no se hubiere deducido demanda civil o ésta fuere extemporánea o si habiéndose presentado no hubiere sido notificada dentro de plazo, podrá interponerse ante el juez ordinario que corresponda, después que se encuentre ejecutoriada la sentencia que condena al infractor, suspendiéndose la prescripción de la acción civil de indemnización durante el tiempo de sustanciación del proceso infraccional. Esta demanda se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio sumario, sin que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil”*.

Ahora bien, del mérito de la causa tenida a la vista como medida para mejor resolver a folio 55, se lee que se interpuso querella infraccional ante el Segundo Juzgado de Policía Local de esta ciudad con fecha 29 de abril de 2020, dictándose la sentencia infraccional que condena a don Aníbal Jayra Flores Mamani el 31 de agosto de 2021, la que fue notificada por correo electrónico el 31 de mayo de 2022.

Es menester dejar asentado que, el procedimiento infraccional comenzó con la interposición de la querella infraccional, de fecha 29 de abril de 2020.

En cuanto al término del procedimiento, del mérito del artículo 9 inciso 5° de la Ley N° 18.287 precitada, se desprende que –para estos efectos– el Legislador considera terminado el procedimiento infraccional *“después que se encuentre ejecutoriada la sentencia que condena al infractor”* (momento en que se autoriza al actor a demandar en sede civil). Oportuno parece señalar que el artículo 18 inciso 4° de la antedicha ley dispone que se podrán realizar las notificaciones vía correo electrónico y, cuando esta forma de notificación sea aceptada por el tribunal, se entenderá válida para todas las resoluciones dictadas durante el proceso; además, se entenderán notificadas a partir del momento del mismo envío. Por lo que, en la especie, la sentencia se entiende notificada a las partes el 31 de mayo de 2022.



Ahora bien, teniendo presente los artículos 21, 27, 32 y 33 de la Ley N° 18.287, en relación al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, se colige que la sentencia quedó ejecutoriada el 8 de julio de 2022.

De lo asentado, se desprende que el procedimiento infraccional Rol 3180-D-2020-035 substanciado ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique (en el cual se ventiló la colisión vehicular que originó la acción civil indemnizatoria perseguida en estos autos) comenzó el 29 de abril de 2020 y terminó el 8 de julio de 2022; suspendiéndose –en consecuencia– el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria durante el lapso que abarcó dichas fechas, reanudándose el cómputo del plazo el 9 de julio de 2022.

VIGÉSIMO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, se concluye que el plazo de prescripción extintiva de la acción intentada en autos vencía el 11 de abril de 2026; por ende, al notificarse la demanda al demandado el 8 de julio de 2024, aún no vencía el plazo de prescripción extintiva, por lo que preciso resulta rechazar la excepción, según se dirá.

4.- En cuanto a los perjuicios demandados y el monto de las indemnizaciones.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo padecido por quien solicita que se le indemnice, y si bien es cierto que en todo caso el daño emergente es indemnizable, también lo es que el que lo reclama debe probarlo. En este sentido, la especie y monto de los perjuicios acarreados por un delito o cuasidelito, sólo resulta de la prueba que se rinda y queda sujeto a la apreciación que de ella se haga por los jueces de fondo, conforme las reglas del título XXXV del libro IV del Código Civil.

Que siendo entonces, como se dijo precedentemente, la conducta del demandado la causa basal del accidente, en la infracción a las leyes del tránsito, nace para quien ha sufrido el daño en su persona o bienes el derecho de ser indemnizado, por el infractor en conformidad al título XXXV del libro IV del Código Civil; por lo que debe responder de los daños acaecidos en los



bienes y persona del demandante; en consecuencia, es de justicia regular prudencialmente los perjuicios originados.

Que, obran en la presente causa la copia de sentencia infraccional, la copia del denuncia de siniestro N.º 93008497, la copia de finiquito por pérdida total y la copia de mandato especial y acta de dejación de restos, siendo estos últimos los documentos que dan cuenta de los gastos efectivamente efectuados por el actor por el vehículo sublite como resultado del choque producido por el actuar negligente de la parte demandada, convirtiéndose éste en el daño patrimonial efectivamente causado al demandante, razón por la cual preciso resulta acoger la demanda en este rubro por la suma señalada, condenándose –en consecuencia– al demandado al pago de la suma ascendiente a **\$7.030.462 (siete millones treinta mil cuatrocientos sesenta y dos pesos)**, según se dirá.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el monto indicado precedentemente deberá reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo, suma que devengará los intereses corrientes previstos para las operaciones reajustables, los que se calcularán a contar que esta sentencia se encuentre ejecutoriada y para el caso de mora.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, la demás prueba rendida no altera lo razonado, por lo que no se hará un análisis pormenorizado de ella.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, no se condenará en costas a la parte demandada, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 2314 y siguientes del Código Civil, Ley de Tránsito, artículos 254, y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE DECLARA:**

En cuanto a la objeción documental:

I.- Que, **SE RECHAZA** la objeción documental opuesta al otrosí del escrito de folio 42, que se tuvo como parte integrante del comparendo de folio



46, por la parte demandada.

En cuanto al fondo:

II.- Que, **SE RECHAZA** la excepción de prescripción opuesta por el demandado al contestar la demanda.

III.- Que, en consecuencia, **SE ACOGE** la demanda de indemnización de perjuicios en juicio sumario, interpuesta a folio 1 por don **DAVID ANTONIO TORO IGLESIAS**, abogado, en representación de **HDI SEGUROS S.A.**, legalmente representada por don **Felipe Feres Serrano**, y por don **Jorge Moreno Paiva**, en contra de don **ANÍBAL JAYRA FLORES MAMANI**, todos ya individualizados.

IV.- Que, se condena a don **ANÍBAL JAYRA FLORES MAMANI** al pago de la suma de **\$7.030.462 (siete millones treinta mil cuatrocientos sesenta y dos pesos)** al demandante, por concepto de daño emergente, según se explicó.

V.- Que el monto indicado precedentemente deberá reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo, suma que devengará los intereses corrientes previstos para las operaciones reajustables, los que se calcularán a contar que esta sentencia se encuentre ejecutoriada y para el caso de mora.

VI.- Que, no se condena en costas a la parte demandada, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RoI N° 1906-2022.-

Dictada por don **HÉCTOR ANDRÉS KOMPATZKI DELARZE**, Juez Titular de este Primer Juzgado de Letras de Iquique.

En Iquique, veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, se hizo constar



por estado diario la sentencia que antecede, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.

